

Trabajo Fin de Grado

Principales modificaciones introducidas por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local

Main changes introduced by Law 27/2013, of 27
December, rationalization and sustainability of the
Local Administration

Autor
Carlos Sancho Gil
NIP: 591447

Director
Fernando Gurrea Casamayor

Facultad de Derecho
2016

RESUMEN

En la legislación española se introdujo la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que modifica preceptos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Su objetivo es el control de los costes de las Administraciones Locales y determinar las competencias para la prestación de servicios que se le asigna a cada Entidad. Se analizan las principales modificaciones introducidas.

PALABRAS CLAVE

Régimen local. Racionalización organizativa. Control del gasto. Estabilidad presupuestaria. Competencias asignadas.

ABSTRACT

In the Spanish legislation was introduced Law 27/2013, of 27 December, rationalization and sustainability of the Local Administration amending precepts of Law 7/1985, of 2 April, regulating the Local Administrations. Its aim is to control the costs of Local Government and determine the competencies for the provision of services that is assigned to each Entity. The main changes are analyzed.

KEY WORDS

Local regime. Organizational rationalization. Cost control. Budget stability. Competences assigned.

SUMARIO

- I. INTRODUCCIÓN**
- II. LA DIFICULTAD PARA LA APROBACIÓN DE LA NORMA**
- III. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL**
 - 1. EL MUNICIPIO
 - 2. LA PROVINCIA Y OTROS ENTES LOCALES
 - 3. POTESTAD NORMATIVA
 - 4. RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES
- IV. COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES BÁSICAS DE LAS CORPORACIONES LOCALES**
 - 1. LOS AYUNTAMIENTOS
 - 2. LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES
- V. EL OBLIGADO EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA NECESARIA RENDICIÓN DE CUENTAS**
 - 1. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO
 - 2. FORMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
- VI. REGIDORES Y EMPLEADOS PÚBLICOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES**
 - 1. ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES LOCALES
 - 2. PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES
- VII. CONCLUSIÓN**
- VIII. BIBLIOGRAFÍA**

ABREVIATURAS

Art/s: Artículo/s

CE: Constitución Española

CC.AA.: Comunidades Autónomas

D.A.: Disposición Adicional

D.T.: Disposición Transitoria

ET: Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

FJ: Fundamento jurídico

Id.: igual

LBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local

LEBEP: Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público

LInc: Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas

LOEPSF: Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

LRCIn: Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado

LRFP: Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública

LRSAL: Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

PIB: Producto Interior Bruto

RTC: Repertorio del Tribunal Constitucional

STS: Sentencia del Tribunal Constitucional

TC: Tribunal Constitucional

I. INTRODUCCIÓN

La cuestión de la organización territorial del Estado es uno de los asuntos más importantes de nuestro sistema jurídico el cual se encuentra organizado en torno a lo que dispone la Constitución Española de 1978. En ella aparece recogida la organización territorial del Estado. Tal y como recoge la Constitución Española en su artículo 137: *«El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses»*.¹

Tenemos un modelo de Estado descentralizado en el que se reconoce la organización territorial anteriormente descrita. Cada una de estas Administraciones posee personalidad jurídica propia e independencia para gobernarse de acuerdo a sus propios principios siempre de conforme con la legislación.

El Estado se puede entender de maneras diferentes dentro de la propia CE:

«FJ 5: [...] En ocasiones el término Estado designa la totalidad de la organización jurídico-política de la nación española, incluyendo las organizaciones propias de las nacionalidades y regiones que la integran y la de otros entes territoriales dotados de un grado inferior de autonomía; en otras, por el contrario por Estado se entiende sólo el conjunto de las instituciones generales o centrales y sus órganos periféricos, contraponiendo estas instituciones a las propias de las Comunidades Autónomas y otros entes territoriales autónomos ».²

La utilización del término Estado en esas acepciones podría llevar a equívocos en su análisis, por ello no debemos olvidar que la Constitución Española es la norma fundamental de nuestro ordenamiento. Aparecen recogidas tanto la organización autonómica como la organización local.

Principalmente el estudio va encaminado a los municipios y las provincias, ya que son las dos entidades que van a ser cuestión principal de análisis a lo largo del trabajo. Se va a llevar a cabo un análisis de las competencias que tienen asignadas cada una de estas dos Administraciones, evaluar su desarrollo en el tiempo, más concretamente, tras las reformas introducidas con la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

La introducción de esta Ley en nuestro ordenamiento significó que se produjeran múltiples modificaciones en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del

¹ Art. 137 CE

² STC 32/1981, de 28 de julio (RTC 1981, 32)

Régimen Local. Estos cambios se ocasionaron principalmente por el objetivo de la Ley 27/2013 de recortar gastos y mejorar el funcionamiento de las Administraciones, buscando una mejora en la eficacia y en la eficiencia. Llevando a cabo un ajuste de las competencias de las Administraciones evitando duplicidades en la asignación de una competencia a dos Administraciones distintas y buscando hacer efectivo el principio *«Una competencia, una Administración»*.³

Otra parte importante introducida por esta nueva Ley es el papel reforzado en el que se encuentran las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entidades equivalentes ya que se les ha asignado nuevas funciones para los municipios de menos de 20.000 habitantes. También se les da poder para colaborar con las Comunidades Autónomas en los procesos de fusión de municipios. Las Diputaciones Provinciales se han visto teóricamente reforzadas gracias a la entrada de esta Ley en nuestro ordenamiento.

La elección de este tema se debe al interés que suscita la importancia de adaptar la organización y funcionamiento de la Administración Local, tras la reforma del art. 135 CE, que enmarca la estabilidad presupuestaria como tutela de las actuaciones de las Administraciones Públicas. Para cumplirlo se busca que al introducir esta Ley haya un mayor control económico-financiero de las Administraciones locales y una estructuración racional.

Todo ello acompañado de que los municipios son una de las tres Administraciones recogidas por la Constitución Española lo que pone de manifiesto su importancia para el desarrollo diario de nuestras vidas, al ser la Administración más cercana a la ciudadanía. De ahí que el control y establecimiento de unas pautas introducidas por esta Ley sea de gran importancia para la sociedad y dentro del ámbito del Derecho Español haya sido un tema de gran interés, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito ciudadano por los cambios que esto produce en nuestra sociedad.

La metodología seguida para el desarrollo del trabajo consta en el estudio de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y los cambios que ha supuesto su introducción en nuestro ordenamiento normativo.

El análisis ha sido llevado a cabo mediante el estudio a través de manuales de Derecho Administrativo, la lectura de artículos de revistas especializadas o publicaciones

³ Preámbulo LRSAL

similares y el estudio jurisprudencial llevado a cabo de las Sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional.

II. LA DIFICULTAD PARA LA APROBACIÓN DE LA NORMA

Hay que poner de relieve que la LRSAL tiene como fundamento la estabilidad presupuestaria, como de su propio nombre se puede extraer. Ya que los términos de racionalidad y sostenibilidad han sido muy utilizados en los últimos tiempos para justificar las medidas de ajuste llevadas a cabo por el Sector Público.

*«La estabilidad presupuestaria debe adecuarse a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dictada en desarrollo del artículo 135 de la CE.»*⁴ Con ello se pone de relieve la idea sobre la que fundamentar esta nueva Ley, un precepto constitucional. Con ello se busca darle una mayor importancia en nuestro ordenamiento y justificar su introducción en nuestro sistema legislativo.

También tenemos la parte correspondiente a los compromisos europeos que tienen un claro carácter fiscal y se han adquirido de manera prioritaria. Ya que aunque España durante la grave crisis que se vivió no llegó a ser rescatada podría decirse que se encuentra supeditada a lo que determina la Comisión Europea. Desde Europa se han impuesto unos recortes de Gasto Público que deben ser respetados y adaptados a nuestro sistema.

Por ello se debe enmarcar en el momento en el que comenzó su desarrollo y la época que nos ha tocado vivir azotados por una grave crisis económica global, con consecuencias tanto para las entidades públicas como para los ciudadanos en el día a día.

Los primeros pasos para el desarrollo de esta norma datan de julio de 2012 cuando se presentó ante el Consejo de Ministros el primer Anteproyecto de esta Ley. Desde ese momento llegamos hasta febrero de 2013 cuando se dió a conocer un texto oficial del Anteproyecto.

Después de ello aparece un momento bastante importante para todo el proceso como es el Dictamen del Consejo de Estado emitido el día 26 de junio de 2013 en el que se ponían de manifiesto dos grandes cuestiones:

⁴ Preámbulo LRSAL

- La primera es referida al alcance de la pieza básica del llamado “*coste estándar*” de los servicios, que se proyectaba en varios artículos con consecuencias muy intensas. Para el Consejo de Estado esta técnica reduce en exceso el ámbito competencial que integra el núcleo esencial de esta autonomía constitucionalmente garantizada. Y ello porque la efectividad de tal autonomía queda subordinada al cumplimiento de unos requisitos que al margen de no haber quedado adecuadamente definidos en el texto en proyecto no deberían producir el efecto condicionante que se les atribuye que, en última instancia, puede llegar a suponer una atribución en precario a los Municipios de su autonomía.⁵
- La segunda tiene un carácter más dogmático, el Consejo descartaba la invocación como fundamento constitucional del Anteproyecto del art. 149.1.13 CE (bases y coordinación de la planificación de la actividad económica), por entender que el objeto del mismo, a pesar de las constantes alusiones a la sostenibilidad presupuestaria y financiera, no hacía referencia a la regulación de un concreto sector económico.⁶

En el Congreso de los Diputados se produjo la presentación de 10 enmiendas a la totalidad en su modalidad de devolución, las cuales fueron todas desestimadas en el debate de totalidad, a excepción de la procedente del Grupo Vasco que fue retirada porque se alcanzó un acuerdo con el Grupo Popular.

Tras ello se produjo la defensa del Proyecto por parte del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ante el Pleno de la Cámara en el que expuso que las únicas Administraciones que habían conseguido cerrar los Presupuestos Generales del ejercicio del 2012 con un superávit respecto a las previsiones que se tenían eran las entidades locales. En el 2012 el déficit fue de un 6,84% del PIB, de todos los subsectores de las Administraciones Públicas el único que liquidó sus Presupuestos Generales de ese año con un superávit del 0,22% del PIB fueron las entidades locales. Esto refleja que el control de racionalización y sostenibilidad podía haberse encaminado a otras Administraciones quedando de reflejo que los enmendantes podían tener razón en sus solicitudes. Por ello podemos pensar que es una reforma más encaminada para clarificar

⁵ BASSOLS COMA, M., «La racionalización de la Administración local en el marco de la sostenibilidad financiera: panorama general », en *Cuadernos de Derecho Local (QDL)*, nº34, 2014, pp. 21-48.

⁶ BASSOLS COMA, M., «La racionalización...» cit., p. 24

las competencias de cada Administración otorgando a los ciudadanos unos servicios con más eficacias y más transparencia.

Finalmente se presentaron 474 escritos de enmiendas, a la totalidad de devolución, de adición, de modificación, de supresión, de mejora técnica, de ajuste técnico, de sustitución; de las cuales fueron rechazadas todas excepto 10. Estas 10 que se aceptaron simplemente sirvieron para llevar a cabo pequeñas modificaciones de aspectos concretos respecto al articulado de la Ley o sus Disposiciones.

En el Senado se presentaron 7 propuestas de veto de distintos senadores, que fueron rechazadas y 447 enmiendas al articulado del Proyecto. Se introdujeron únicamente las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Hay que destacar que una de las modificaciones más significativas del debate fue la introducción de la conformidad municipal para coordinar por parte de la Diputación los servicios mínimos para los municipios de menos de 20.000 habitantes. También la introducción de la posibilidad otorgada a los municipios de reducir su deuda comercial si destinan el suelo de patrimonio municipal a ello, esto fundamentado en la posibilidad de reducir la deuda (esto es la Disposición Final 4ª).

Finalmente, el Congreso de los Diputados aprobó las enmiendas que se presentaron en el Senado y promulgó la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del lunes 30 de diciembre de 2013.

Esta sencilla y resumida tramitación evidencia la dificultad del Grupo Parlamentario Popular. Todo este proceso deja de manifiesto los problemas que se encontró el Grupo Popular en la tramitación de esta Ley y conseguir su introducción en nuestro sistema normativo. Se podría decir que lo consiguieron llevar a cabo debido a la mayoría absoluta con la que contaban en las Cámaras pues suscitó poco acuerdo de los Grupos Parlamentarios y únicamente votaron a favor el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario del PNV y el diputado de UPN. Esta situación da a entender porque hubo tantas enmiendas durante la tramitación de la Ley y porque actualmente ante el TC hay 9 recursos de inconstitucionalidad concernientes a la LRSAL.

De ellos uno ha sido resuelto en la STC 41/2016, que más adelante será comentado como conclusión.

III. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

1. EL MUNICIPIO

El municipio pertenece a la Administración Local tal y como se recoge en la CE. Es una de las organizaciones administrativas en la que se encuentra dividido el territorio español: la Administración Estatal, la Administración Autonómica y la Administración Local.

*«La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La Ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.»*⁷

Aquí lo primero que se debería analizar es la autonomía que deberían tener las Administraciones Locales como recoge la CE, ya que su propia personalidad jurídica es fiel reflejo de ello o debería serlo. Es una garantía institucional que le otorga el derecho a intervenir en los asuntos de interés local, esta intervención se llevará a cabo mediante las competencias asignadas por las Leyes –estatales o autonómicas-.⁸

La elección de sus órganos se lleva a cabo por sufragio universal en el que los ciudadanos de modo directo eligen sus órganos de gobierno. *«Los municipios son las entidades locales básicas de la organización territorial del Estado.»*⁹

Quiere decir que al ser las entidades básicas de la organización del Estado son las que hasta este momento están cercanas al ciudadano y su Gobierno va encaminado a satisfacer sus necesidades en los ámbitos que desde las CC.AA. y el Estado no se llegue.

El art. 19 de la LBRL desarrolla el modo de gobierno de estas entidades siguiendo lo que dispone la CE en el art. 140, exceptuando los municipios que funcionan en Concejo Abierto.

La organización de los municipios aparece recogida en el artículo 11.1 de la LBRL:

- *El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno* existen en todos los ayuntamientos.

⁷ Art. 140 CE

⁸ MARTIN REBOLLO, L., *Leyes Administrativas [Manual y Normas Básicas]*, Aranzadi, Navarra, 2015, Libro Primero. Capítulo VIII

⁹ Art. 11.1 LBRL

- *La Junta de Gobierno Local* existe en todos los municipios de más de 5.000 habitantes o en los de menos, si es acordado en *Pleno* o dispuesto por su reglamento orgánico.
- Pueden existir órganos dedicados al estudio, informe o consulta de los asuntos que serán sometido en *el Pleno*, también órganos para seguir la gestión del *Alcalde y la Junta de Gobierno Local*; si son municipios de más de 5.000 habitantes o en los de menos, si es acordado en *Pleno* o dispuesto por su reglamento orgánico.
- *La Comisión Especial de Cuentas* existe en todos los municipios de acuerdo con lo previsto en el artículo 116. Cuya función principal es informar sobre las cuentas anuales antes de su sometimiento al *Pleno* para su aprobación y está compuesta por miembros de los distintos grupos políticos integrantes del *Pleno*. Las cuentas anuales se someterán antes del 1 de junio a informe de *la Comisión Especial de Cuentas* de la Entidad local y serán objeto de información pública antes de someterse a aprobación del *Pleno*.
- En estos órganos se encontrarán representados todos los grupos que formen parte del *Pleno* en la medida proporcional a su representación en esta Cámara.

2. LA PROVINCIA Y ENTIDADES EQUIVALENTES

La provincia pertenece a la Administración Local tal y como se recoge en la CE. Su origen se encuentra recogido como una Administración periférica del Estado y fue evolucionando hasta su actual nivel de Entidad Local. Es un ente regulado en la CE como aquí se recoge:

«1. *La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier atención de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.*

2. *El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.*

3. *Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.*

4. *En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.»*¹⁰

¹⁰ Art. 141 CE

Lo primero que hay que destacar de esta entidad es que su gobierno se encuentra encomendado a las Diputaciones Provinciales donde se engloban los Municipios y es una entidad que posee personalidad jurídica propia.

El art. 31 de la LBRL desarrolla la finalidad, características y órgano de gobierno de la Provincia siguiendo lo que dispone la CE en el art. 141:

- Se recoge su *personalidad jurídica propia* y capacidad plena para cumplir los fines encargados.
- Se le otorgan como fines propios: el *asegurar la prestación integral y adecuada* en todo su territorio *de los servicios municipales* y la *coordinación* de la Administración Local con la de la CCAA y el Estado.
- *El gobierno y la administración* de la Provincia *corresponde* a la Diputación.

En todas las Diputaciones encontramos un Presidente, Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno, estos órganos son los encargados de controlar y dirigir el funcionamiento de esta Administración. También existen otros órganos diferentes que puedan servir como apoyo al Pleno para que desarrolle sus competencias y en estos órganos se encontrarán representados los grupos políticos de la misma manera proporcional que se encuentren representados en el Pleno.

Las funciones del Pleno, el Presidente y la Junta de Gobierno de esta Administración se encuentran recogidas en los artículos 33, 34 y 35 de la LBRL.

3. POTESTAD NORMATIVA

Las entidades locales tienen la potestad normativa para dictar normas con carácter reglamentario, esto es una demostración de la autonomía que poseen respecto al Estado y las CC.AA. Resulta importante porque les concede una potestad que les permite la regulación de sus propios asuntos mediante el edicto de estos reglamentos o en el ámbito municipal conocidos como ordenanzas. Esta potestad normativa les sirve para la regulación de la esfera jurídica de los ciudadanos y para regular la organización, el funcionamiento y los servicios de la Entidad que los dicta.

Que tengan un carácter reglamentario no significa que se encuentren por debajo de otras leyes porque no rige el principio de jerarquía en estas relaciones sino el de especialidad, que significa que la norma especial tiene prevalencia sobre la norma general.

«Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de

*bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes».*¹¹

Este artículo aumenta la autonomía de las Entidades Locales y le confiere cierta independencia para el desarrollo de sus competencias siempre y cuando respeten la legislación.

Para la tramitación de una Ordenanza por parte de las Entidades locales será necesario que sigan el siguiente procedimiento:

- *El Pleno* aprobará que se tramite la Ordenanza
- Para que puedan presentarse reclamaciones por parte de los interesados se informará públicamente de su tramitación y los interesados tendrán 30 días de plazo para exponer sus solicitudes.
- Aquellas solicitudes presentadas en plazo se deberán resolver y luego *el Pleno* procederá a la aprobación de la Ordenanza.

4. RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES

Para que tanto la Administración General del Estado como las Administraciones local y autonómica se encuentren coordinadas y desarrollen sus funciones eficazmente, deberán seguir y respetar el principio de *lealtad institucional* en sus relaciones:

- Respetar el ejercicio de las competencias y las consecuencias que deriven de la prestación por otra Administración.
- En la actuación de las competencias propias cuya gestión este encomendada a otra Administración se deben ponderar los intereses públicos implicados.
- Llevar a cabo una valoración del impacto en materia presupuestaria y financiera provocado en el resto de Administraciones, por sus actuaciones.
- Informar de la gestión propia al resto de Administraciones cuando sea relevante para el desarrollo de sus cometidos.
- Cooperar y asistir a otras Administraciones cuando fuera preciso para el cumplimiento eficaz de sus tareas.

En resumen la LBRL obliga a que las Administraciones tengan unos mecanismos de cooperación e información para agilizar y mejorar el desarrollo competencial otorgado a cada una de manera más eficaz.

¹¹ Art. 5 LBRL

IV. COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES BÁSICAS DE LAS CORPORACIONES LOCALES

1. LOS AYUNTAMIENTOS

Las competencias propias de los Municipios deben ser determinadas por Ley y deben estar adaptadas a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. Esta Ley debe acompañarse de una memoria económica donde aparezcan reflejados todos estos principios. Además esa Ley debe cumplir los principios financieros que se han establecido y bajo ningún concepto pueden acarrear un mayor gasto para las Administraciones Públicas. Se debe evitar una duplicidad en su prestación, asegurando que sea propia del Municipios y no atribuirse a otra Administración.

El art. 25 de la LBRL recoge un abanico de competencias que les pueden ser atribuidas como propias a los Municipios en los términos que la legislación del Estado o las CC.AA., en las siguientes materias:

- Materias urbanísticas y protección y gestión del Patrimonio histórico.
- Medio ambiente urbano; gestión de residuos y protección contra la contaminación.
- Abastecimiento agua y tratamiento de aguas residuales
- Infraestructuras viarias
- Materias de carácter social: necesidad y atención a personas con riesgo o en situación de exclusión social
- Policía local, protección civil y prevención y extinción de incendios.
- Gestión del tráfico y del transporte colectivo urbano
- Gestión e información turística de ámbito local
- Promoción de ferias y mercados
- Protección de la salubridad pública
- Cementerios
- Promoción del deporte y la cultura; y sus equipamientos o instalaciones.
- Control de la escolaridad obligatoria y cooperación y conservación con las Administraciones educativas para mantener y construir centros docentes de titularidad local.
- Promocionar el uso eficiente y sostenibles de las tecnologías de información y comunicaciones

La redacción actual de este artículo procede del art. 1.8 LRSAL. Supone cambios respecto a la redacción que existía anteriormente porque en su contenido aparecía la posibilidad de promover *toda clase* de actividades y prestar *cuantos servicios públicos* contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Actualmente el art. 25.1 LBRL¹² con su nueva redacción elimina las opciones que abría y permitían que mediante la legislación autonómica se aumentara la lista de competencias aquí reflejadas.

En cuanto a las materias aquí reflejadas hay una diferencia respecto de la primera versión y la actual, desaparecen la redacción que se refería a *participación en la gestión de la atención primaria de la salud, prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social y participación en la programación de la enseñanza e intervención en sus órganos de gestión*. La D.A. 15ª, la D.T. 1ª y la D.T. 3ª de la LRSAL regulan las competencias relativas a lo anteriormente descrito y su asunción por parte de las CC.AA.

Este artículo que plasma la autonomía municipal no recoge todas las competencias precisas y únicamente en esta Ley. Ya que el contenido competencial de los municipios depende de leyes sectoriales, estatales o autonómicas que regulen cada sector de la actividad pública de las competencias anteriormente descritas. Es en esas leyes donde encontraremos el contenido competencias completo de las Administraciones locales.

Estas competencias enumeradas son las que se pueden adquirir por medio de la LBRL o la legislación de desarrollo de las CC.AA. que las otorguen en exclusiva al Municipio.

Se desarrollarán para la gestión de sus intereses y la promoción y prestación de servicios públicos que satisfagan a la comunidad vecinal en las materias antes relacionadas.

Serán determinadas por Ley y tras evaluar su implantación local conforme a los principios de descentralización, eficacia¹³, eficiencia¹⁴, estabilidad y sostenibilidad financiera¹⁵.

¹² Art. 25.1 LBRL: «El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo»

¹³ Art. 103.1 CE: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho»

¹⁴ Art. 31.2 CE: «El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía»

¹⁵ Art. 135 CE: «1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito 2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se

Esta Ley deberá acompañarse de una memoria económica en la que se refleje el impacto en los recursos financieros de las Administraciones afectadas. También debe prever la dotación de los recursos que fueran necesarios para asegurar que no suponga un mayor gasto y las Entidades Locales tengan la financiación suficiente para su desarrollo.

La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.

El art. 26 de la LBRL recoge las competencias que deberán prestar los Municipios en cualquier caso, las conocidas como competencias propias. Deberán prestarlas para los siguientes servicios:

«a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano».¹⁶

Este apartado enumera los servicios mínimos, se han producido cambios respecto a la redacción que existía anteriormente porque para todos los municipios se ha eliminado lo referido *al control de alimentos y bebidas*. Para los municipios de más de 5.000 habitantes se han eliminado los *mercados*. Para los municipios de más de 20.000 habitantes se ha sustituido *prestación de servicios sociales* por *evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social*.

Uno de los cambios en cuanto a la redacción de mayor importancia se produce en los municipios de población inferior a 20.000 habitantes, los servicios serán coordinados por la Diputación provincial o entidad equivalente para las siguientes materias:

entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión»

¹⁶ Artículo 26.1 LBRL

- Recogida y tratamiento de residuos
- Abastecimiento de agua potable a domicilio y tratamiento de aguas residuales
- Limpieza y pavimentación de las vías urbanas
- Acceso y alumbrado público en los núcleos de población

La coordinación de la citada prestación por parte de la Diputación podrá ser directamente o a través de gestión compartida como consorcios, mancomunidades u otras formas; los municipios afectados deberán prestar su conformidad. La Diputación hará esta propuesta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que deberá decidir sobre la propuesta, si la Comunidad Autónoma ejerce la tutela financiera deberá presentar un informe preceptivo.

El municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si justifica ante la Diputación que lo llevará a cabo con un menor coste efectivo que del propuesto por la Diputación.

Si finalmente asume la prestación de estos servicios la Diputación se les repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si su financiación es por medio de tasas y lo presta la Diputación será quien reciba las tasas para financiar los servicios.

La asistencia de las Diputaciones, prevista en el artículo 36 LBRL, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos necesarios para los ciudadanos.

El art. 7.4 LBRL¹⁷ va en relación con las competencias de las Entidades Locales, ya que se regula para los supuestos de ejercicio de competencias diferentes de las propias o las delegadas.

2. LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES

¹⁷Art. 7.4 LBRL: «Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.»

La Provincia tiene como fines propios la coordinación en la prestación de los servicios de competencia municipal y la coordinación de las relaciones entre la Administración Local con las de la Comunidad Autónoma y el Estado.

Las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes tienen competencias que les sean atribuidas por leyes del Estado o las Comunidades Autónomas y tienen marcadas como competencias propias:

- La *coordinación de los servicios* municipales en la prestación de los servicios de competencia municipal para asegurar su prestación integral y adecuada.
- La *coordinación de las relaciones* entre la Administración Local con las Administraciones de la Comunidad Autónoma y del Estado.
- *Asistencia y cooperación* jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los que menor capacidad tenga para su gestión y con menos recursos económicos. A los municipios de 1.000 habitantes les garantizará los servicios de secretaria e intervención.
- La *prestación de servicios públicos de carácter supra municipal*. Cuando en los municipios no procedan a su prestación, los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes.
- *Cooperar el desarrollo de su territorio* provincial en los ámbitos económico y social.
- *Funciones de coordinación*, si se incumpliera el objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o la regla de gasto por una corporación local.

Esta redacción mantiene la anterior con algunas modificaciones como *garantizar a los municipios de menos de 1.000 habitantes los servicios de secretaría e intervención* o la segunda parte dada al artículo c)¹⁸

La Diputación podrá suprimir las competencias a la Entidad Local, gestionar o coordinar la gestión de esos servicios, incrementar la financiación para esos servicios o proceder a racionalizar la organización. En este artículo 36.1 LBRL se introdujeron tras la modificación:

- Ejercer las funciones de coordinación en los supuestos del art. 116 bis.
- Asistir a la *gestión financiera* y recaudación de tributos en los municipios con menos de 20.000 habitantes.

¹⁸ Art. 36.1 LBRL tras la nueva redacción dada por la LRSAL

- Para los municipios de menos de 20.000 habitantes prestar servicios de administración electrónica y contratación centralizada.
- Si detecta que los costes efectivos de servicios prestados por municipios de su provincia son superiores a los que ella presta, podrá ofrecerles una *gestión coordinada* para reducir dichos costes.
- El *servicio de limpieza y mantenimiento coordinadamente* con la Comunidad Autónoma, en los consultorios médicos de municipios con menos de 5.000 habitantes.

Esto supone que se aumentaron las competencias que tenía asignadas anteriormente, porque como se ha comentado al entrar la LRSAL se ha producido un cierto reforzamiento de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes.

La Diputación o entidad equivalente para los tres primeros puntos anteriormente descritos:

- En cooperación con los Municipios *elabora un plan de cooperación* respecto a las obras y servicios de competencia municipal. En el que debe haber un plan con los objetivos y la distribución de los fondos necesarios para ello, esto se recogerá en una memoria. La financiación puede provenir de la propia Diputación y sus fondos, de aportación municipal o subvenciones proporcionadas por las Comunidades Autónomas o el Estado.
Si la Diputación detecta que la prestación de estos servicios por parte de los municipios supera el coste que supondría su prestación por parte de la Diputación puede *incluir planes de prestación conjunta* o supra municipal.
- La Diputación *asegura la prestación de los servicios mínimos* que sean de competencia municipal y sean prestados eficaz y económicamente. Para ello pueden subvencionar dichos servicios si lo consideran oportuno.
- Se *garantizan las funciones públicas necesarias* en los Ayuntamientos y puede apoyarlos en materias de formación y selección de personal.
- En las *actividades de gestión* de los Ayuntamientos *dará el soporte necesario* o incluso las asumirá si estos se lo encomiendan.

Las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, podrán asumir las competencias para la prestación de servicios en virtud de que les sean delegados por parte de las Comunidades Autónomas, si ordenan que se les gestionen servicios propios en los términos previstos en los Estatutos.

El Estado podrá delegar siempre que sea autorizado por la Comunidad Autónoma y sea para servicios de mera ejecución cuando ese ámbito sea el más adecuado para ello.

Una de las causas que ha tenido la entrada en vigor de esta nueva legislación es que la Diputación Provincial ha ganado en importancia competencial asumiendo algunas competencias que antes eran propias o estaban gestionadas por parte de los Municipios. Este apartado 2 del art. 36 de la LBRL es muy importante también para el control financiero porque especifica que debe contener una memoria que principalmente servirá para reflejar el control del gasto y la financiación que se establecerá.

La diputación también puede gestionar una figura que ha perdido importancia con la actual redacción de la LBRL como son las mancomunidades municipales. Siguen manteniendo la condición de entidades locales como aparece recogido en el artículo 3.2.c) LBRL y es uno de los instrumentos de asociacionismo municipal. Podrán formarse a iniciativa de la Diputación o entidad equivalente mediante su coordinación para la prestación de servicio a través de las mancomunidades de varios municipios, lo que supone una gestión compartida.

Para las mancomunidades de municipios ya existentes se impuso una necesidad de adaptar sus estatutos para no ser disueltas, esta disolución de producirse sería llevada a cabo por la Administración de las Comunidades Autónomas.

V. EL OBLIGADO EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA NECESARIA RENDICIÓN DE CUENTAS

1. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO

El equilibrio financiero es uno de los principios básicos de la LRSAL. Porque con ello lo que se pretende es que las Administraciones no incurran en gastos innecesarios o superiores a los previstos que provoquen un déficit en las cuentas.

Se basa en el artículo 142 CE: *«Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónoma »*.¹⁹

Esto significa que la insuficiencia financiera de una Administración Local no puede darse porque no tiene los medios económicos necesarios para la gestión y el cumplimiento mediante la recaudación de sus propios tributos locales o incluso una

¹⁹ Artículo 142 CE

parte de la recaudación conseguida mediante tributos por el Estado y las Comunidades Autónomas.

A los Municipios les podrán ser delegadas competencias propias del Estado y de las Comunidades Autónomas. Esta delegación se podrá llevar a cabo si significa una mayor eficiencia en su gestión, no provoca una duplicidad de competencias y siempre que respete los principios de sostenibilidad financiera y gestión presupuestaria. La Administración delegante tiene que controlar que su prestación sea eficiente y no suponga un mayor gasto para las Administraciones Públicas. Tiene que tener una duración mínima de cinco años y una memoria económica justificativa del gasto que va a conllevar.

Si la delegación se produce en dos o más municipios deberán seguir unos criterios análogos. Esta delegación se podrá coordinar con la ayuda de las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes.

En el artículo 27.3 de la LBRL aparecen las materias que pueden delegar el Estado y las Comunidades Autónomas para contribuir al ahorro, algunas de las competencias serán:

- *Vigilancia y control* de la contaminación
- *Protección* medio natural
- *Prestar servicios* sociales de igualdad y prevención de la violencia de género
- Mantenimiento de centros sanitarios de la Comunidad Autónoma
- *Gestionar instalaciones* culturales e instalaciones deportivas titularidad del Estado o la Comunidad Autónoma
- *Promoción y gestión* del turismo
- *Recaudación tributaria* propia del Estado o la Comunidad Autónoma

La delegación de estos servicios podrá ser controlada por la Administración delegante mediante instrucciones necesarias para evitar o subsanar posibles errores. Si estas directrices o instrucciones no son acatadas, la Administración delegante podrá llevar a cabo la revocación de la delegación o ejecutarla por sí misma.

Para que la delegación resulte efectiva deberá ser aceptada por el Municipio.

También se debe acompañar de la partida presupuestaria necesaria y suficiente para cada ejercicio de los que dure la delegación, deberá estar reflejada en los presupuestos de las Administraciones delegantes sino la delegación será nula. Si la Administración delegante incumple sus obligaciones financieras la Entidad Local podrá compensarla con otras relaciones financieras existentes entre ambas Administraciones.

El acuerdo que disponga la delegación también establecerá las causas que provocarán la cancelación o el desistimiento. El acuerdo de renuncia se adoptará por la Entidad Local siempre que sea con fundamento en estas causas, mediante acuerdo del Pleno.

Para el ejercicio de las competencias delegadas debe respetarse la legislación estatal o autonómica que corresponda.

Como anteriormente se ha descrito, en estos preceptos es donde encontramos la regulación necesaria para la delegación de competencias en un Municipio. Se establecen unos mecanismos de control y unas pautas que deben cumplirse tanto por parte del delegante como por parte del delegado y las causas que pondrán fin a la delegación.

El control financiero planteado por la LRSAL se fundamenta en evitar que se dupliquen competencias entre las diferentes Administraciones siguiendo los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera; porque si nos encontramos ante una competencia duplicada en su prestación tenemos un problema tanto económico como técnico para su prestación.

La redacción que se le da tras este cambio al apartado 1 del art. 2 de la LBRL queda modificada de la siguiente manera:

*«Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades Locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de la acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y la capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».*²⁰

Dentro de esta estabilidad financiera nos encontramos con la fusión de municipios, es una figura desarrollada para reducir el número de Administraciones con lo que se espera conseguir un ahorro en la gestión de pequeños municipios. Si estos pequeños municipios se unen en una única entidad su gestión resultará menos costosa ya que formarán parte de un único municipio y los servicios serán gestionados comúnmente. Lo que se busca con la fusión es que las entidades creadas tengan más de 5000

²⁰ Art. 2.1 LBRL modificado por el art. 1.1 LRSAL

habitantes y que esto sea financieramente adecuado, queda regulado por la modificación introducida en el art. 13 de la LBRL:

*«La legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regulará la modificación de municipios y en ningún caso podrán suponer una modificación en los límites provinciales, para crear o suprimir municipios hay que respetar estos términos. Cuando se de esta situación: «Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado»».*²¹

La población del nuevo municipio creado mediante fusión deberá superar los 5.000 habitantes y respetar la sostenibilidad financiera, sin que su creación produzca en un perjuicio para la prestación de las competencias municipales a los ciudadanos y los servicios que sean prestados por la nueva Entidad sean de la misma calidad que los prestados anteriormente.

El Estado puede llevar a cabo medidas proclive a la fusión de municipios si esto va a suponer una mejora para la gestión pública de ellos, siempre que respete las competencias de las Comunidades Autónomas y con unos criterios determinados que lo justifiquen.

*«Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión».*²²

La fusión supondrá:

- La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones del municipio fusionado. Las medidas necesarias para la organización de las nuevas estructuras y los nuevos recursos de que dispondrá la Corporación se aprobarán por los Plenos de los municipios que se vayan a integrar. Estas medidas no podrán suponer un mayor gasto para los municipios afectados, sino se incumpliría la racionalización pretendida.

²¹ Art. 13.1 LBRL modificado por el art. 1.5 LRSAL

²² Art. 13 LBRL modificado por el art. 1.5 LRSAL

- Los concejales de los municipios fusionados serán los que formen el nuevo órgano de gobierno resultante, respetando lo previsto en la Ley de Régimen Electoral.
- Todos o alguno de los municipios fusionados si así se ha acordado podrán actuar como una organización descentralizada.
- El municipio que surja se subrogará en los derechos y obligaciones que tuvieren los municipios fusionados.
- Si dentro de los municipios fusionados alguno de ellos se encontrara en una situación de endeudamiento y así se acuerda, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales podrán integrarse en un fondo para liquidarse. La liquidación se tramitará en un plazo no superior a los cinco años desde que se adopte el acuerdo de fusión, esta liquidación debe respetar los derechos de los acreedores. Para que la creación de este fondo sea posible, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas por medio de la Intervención General de la Administración del Estado, la contabilidad se aprobará mediante norma dictada por esta entidad.
- El presupuesto que tenga disponible el nuevo municipio para el año siguiente a la fusión tendrá que haber sido aprobado por el gobierno resultante.

El resto del proceso de fusión será coordinado por las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes, para ello colaborará con la Comunidad Autónoma.

La aprobación de la fusión requerirá de mayoría simple en los plenos de los municipios que formen parte de la fusión.

Uno de los nuevos artículos en introducirse fue el art. 24 bis en la LBRL, que supone que los entes inferiores al Municipio no tendrán personalidad jurídica y solo se podrán crear y gestionar independientemente del municipio siempre que esto suponga una mejora financiera si se lleva a cabo de este modo. También resulta destacable que estos entes carecerán de personalidad jurídica propia, cuando hasta ahora todos los entes que habíamos estudiado gozaban de ella y de capacidad propia para su gestión.

Deben regularse por las leyes de las Comunidades Autónomas sobre el régimen local, la denominación de estos entes serán las tradicionales: caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanía, lugares anejos y otros equivalentes.

La iniciativa para esta forma de gestión puede presentarse por parte de la población interesada o del Ayuntamiento pertinente.

Como ya se ha comentado anteriormente solo se puede llevar a cabo cuando suponga un menor gasto y respetando los *principios de racionalización y sostenibilidad*.

2. FORMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La LRSAL introduce un sometimiento de las cuentas de las Entidades locales a un régimen de control financiero de carácter público.

La fiscalización de las cuentas queda asignada al Tribunal de Cuentas.

Si existen irregularidades en las cuentas anuales o en la gestión económica de la Entidad local se podrá presentar reclamación ante este Tribunal. Las cuentas anuales serán sometidas a informe por parte de la Comisión de Cuentas de la Entidad local, que se constituye por miembros de los grupos políticos que forman el Pleno de la Entidad, antes del 1 de junio y se deben informar públicamente antes de someterse a aprobación por parte del Pleno.

Para evaluar los costes en la prestación de los servicios resulta necesario que existan instrumentos de carácter técnico que permitan evaluar el rendimiento económico en la gestión de estos servicios.

Por todo ello aparece el nuevo art. 116 bis en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en el que se establece un *plan económico-financiero* para seguir con el control que se introduce en nuestro ordenamiento jurídico.

A continuación se analizarán varias de las cuestiones que recoge el citado artículo.

Cuando las Entidades locales incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de gasto; deberán formular un plan económico-financiero de acuerdo a los requisitos que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este plan al menos incluirá las siguientes medidas:

- Se *suprimirán* las competencias ejercidas por la Administración Local que no sean propias o le hayan sido delegadas.
- La *gestión o coordinación* de los servicios obligatorios que supongan una reducción de costes.
- El *aumento* de los ingresos a las Entidades locales para la prestación de los servicios obligatorios.
- *Racionalizar* la organización de la Entidad Local.
- Las antes mencionadas entidades de ámbito inferior al Municipio se *suprimirán* cuando no cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o los períodos medio de pago a los proveedores por parte de estas entidades

superen en más de treinta días el máximo previsto en la normativa reguladora de la morosidad.

- Una *propuesta de fusión* con un municipio de la misma provincia.

Para la elaboración y seguimiento de los planes económico-financieros y las medidas que estos dispongan, la Administración que ejerza la tutela financiera será asistida por parte de la Diputación provincial o entidad equivalente. Las medidas recogidas en los puntos anteriores serán propuestas y coordinadas por parte de la Diputación o entidad equivalente, incluso para el seguimiento en la fusión de Entidades locales también se dispondrá de esta Administración.

Se añadió un artículo relativo al coste efectivo de los servicios, aparece plasmado en el art. 116 ter. LBRL²³:

- El cálculo de los costes efectivos de la prestación de servicios que lleven a cabo las Entidades Locales se calculará todos los años antes del 1 de noviembre, para ello se tendrán en cuenta los datos del presupuesto general y, si existen, las cuentas anuales del ejercicio económico anterior de las entidades vinculadas o dependientes de ellas.
- Para este cálculo se tendrán en cuenta tanto los costes directos como los indirectos de la prestación de los servicios. Los criterios para llevar a cabo este cálculo serán determinados por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Para que se puedan publicar estos costes, cada Entidad Local deberá proceder a su comunicación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En estos nuevos artículos introducidos encontramos recogidas algunas de las herramientas puestas a disposición de las Administraciones para el control del gasto.

No se debe olvidar que el plan económico-financiero y el cálculo y la comunicación del coste efectivo de los servicios son dos nuevas herramientas, para aumentar y alcanzar el control de los nuevos objetivos de racionalización y sostenibilidad de las Administraciones Públicas. Al otorgarles publicidad a estas acciones se puede considerar que se le quiere dar una mayor transparencia a las actuaciones de las Administraciones y aumentar su control.

²³ Añadido a la LBRL por el art. 1.31 LRSAL

VI. REGIDORES Y EMPLEADOS PÚBLICOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES

1. ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES LOCALES

Se encuentra en el Capítulo V del Título V de la LBRL, es uno de los que más modificaciones ha sufrido ya que en los miembros de las Corporaciones locales es donde se puede llevar a cabo de un modo más efectivo el control y recorte de los gastos. Los miembros de las corporaciones locales se constituyen en grupos políticos para su actuación en los órganos de las corporaciones. Algunos miembros de las corporaciones son nos adscritos cuando abandonen el grupo político o no se integren en él.

Estos grupos políticos tendrán una dotación económica reflejada en los Presupuestos anuales de la corporación, se asignará por el Pleno y tendrá una parte fija que será igual para todos y una parte variable que dependerá del número de miembros que tenga cada uno de los grupos. Estas dotaciones económicas deberán ajustarse a lo dispuesto por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y no podrán superar los límites que en esta Ley se impongan.

La dotación asignada a cada grupo político debe llevar una rigurosa contabilidad y estar a disposición del Pleno cuando éste lo solicite.

Las retribuciones percibidas por los miembros de las Corporaciones locales aparecen recogidas en el art. 75 de la LBRL, donde se regulan algunas medidas para hacer frente al control económico en las Corporaciones locales y sus miembros.

- Las retribuciones de los miembros con dedicación exclusiva de las Corporaciones locales y el alta en el Régimen general de la Seguridad Social deberá ser asumido por las corporaciones a las que pertenezcan estos trabajadores.

Las retribuciones percibidas anteriormente descritas serán incompatibles con la percepción de otra retribución de una Administración diferente²⁴ y entes dependientes de ellas, también existirá incompatibilidad para desarrollar otras actividades.²⁵

- Los miembros de las Corporaciones locales que tengan funciones de presidencia, vicepresidencia o responsabilidades que lo requieran, con una dedicación parcial, percibirán retribuciones por ello y el alta en el Régimen de la Seguridad

²⁴ Art. 10 LInc: «*Quienes accedan por título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a esta Ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión*»

²⁵ Art. 12 LInc

Social será asumido por las Corporaciones así como el pago de las cuotas que esto genera. Las retribuciones percibidas deben ajustarse y no superar los límites fijados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Para que esta dedicación parcial conlleve una retribución, se deberá acordar por el Pleno la dedicación mínima necesaria para que sea retribuida.

Los miembros que sean personal de las Administraciones públicas o entes y organizaciones dependientes de ellas solo podrán percibir retribución por funciones fuera de su centro y horario de trabajo²⁶.

- Por asistir a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de la cual formen parte solo podrán recibir asistencia aquellos miembros que no tengan dedicación exclusiva ni parcial.
- Los gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo a los miembros de las Corporaciones locales les serán indemnizados en base a la normas de las Administraciones públicas.
- Las retribuciones, asistencias e indemnizaciones que se reflejan en los puntos anteriores deben estar determinadas en los presupuestos de la Corporación local.²⁷
- Para la asistencia al pleno de la Corporación o las Comisiones de las que forme parte el interesado se encuentra regulado el tiempo imprescindible.²⁸
- Los representantes locales y los miembros no electos de la Junta de Gobierno deberán formular declaración de causa de incompatibilidad y sobre actividades por las que reciban o puedan recibir ingresos. También publicarán una declaración con los bienes y participaciones de sociedades todos los años y con carácter público, de acuerdo a lo fijado en el Estatuto municipal. Deben inscribirse en sus correspondientes registros, tal y como recoge el artículo

Tales declaraciones se inscribirán en los Registros de intereses, que tendrán carácter público.²⁹

²⁶ Art. 5 LInc

²⁷ Art. 75.5 LBRL: «Deberán publicarse íntegramente en el "Boletín Oficial" de la Provincia y fijarse en el tablón de anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial».

²⁸ Por lo dispuesto en el art.37.3d) del ET y art. 30.2 LRFP: «Podrán concederse por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal».

²⁹ Art. 75.7 LBRL: «a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, se inscribirá, en el Registro de Actividades

Si consideran que su seguridad está amenazada podrán realizar la declaración de los bienes ante el Secretario o Secretaria de la Diputación Provincial o el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Estas declaraciones se inscribirán en el Registro Especial de Bienes Patrimoniales. Aportarán al la certificación de que se han inscrito en dicho Registro.

- Hasta pasados 2 años desde el fin de su mandato se encontrarán sujetos a las limitaciones para ejercer actividades privadas.³⁰

Para este periodo podrán tener una compensación económica si no pueden llevar a cabo el desempeño de su actividad profesional a causa de estas incompatibilidades ni perciban ingresos por otras actividades.

El art. 75 bis de la LBRL³¹ regula el límite máximo que pueden percibir los miembros de las corporaciones locales.

- El límite máximo a percibir por los miembros de las Corporaciones locales quedará limitado a lo dispuesto en los Presupuestos Generales del Estado. Esta retribución variará y quedará supeditada proporcionalmente a la población del municipio. A mayor tamaño del municipio una mayor retribución podrán obtener.

Los miembros de municipios con poblaciones inferiores a 1.000 habitantes, sólo podrán tener dedicación parcial y la retribución será la dispuesta como máximo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

- La retribución máxima que pueden percibir los Presidentes de las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes será como máximo la que corresponda al Alcalde del municipio con mayor población en su provincia.

Si un concejal es elegido miembro de la diputación provincial o entidad equivalente deberá elegir en cual de las dos Entidades locales presta su dedicación en exclusiva.

El art. 75 ter. LBRL³² recoge los límites de personal con dedicación exclusiva que pueden existir en cada municipio dependiendo de la población de dicho municipio:

- En los municipios de menos de 1.000 habitantes no puede haber ningún miembro con dedicación exclusiva en la Corporación local.

constituido en cada Entidad local. b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Registro de Bienes Patrimoniales de cada Entidad local, en los términos que establezca su respectivo estatuto».

³⁰ Art. 8 LRCIn

³¹ Nuevo artículo introducido en la LBRL por el art. 1.18 LRSAL

³² Nuevo artículo introducido en la LBRL por el art. 1.19 LRSAL

Como máximo en los municipios entre 700.001 y 1.000.000 de habitantes podrá haber en régimen de dedicación exclusiva veinticinco miembros.

Los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona son la excepción a estos límites máximos ya que podrá haber cuarenta y cinco y treinta y dos respectivamente.

Para el resto de Corporaciones locales se recogen dependiendo de los habitantes de la población los números máximos, irán en carácter proporcional a mayor población una mayor cantidad de miembros con dedicación exclusiva; los nombrados anteriormente son los más destacados.

- En las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes este número máximo será el mismo que el correspondiente al municipio con mayor población de su provincia.

2. PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES

Se encuentra en el Capítulo I del Título VII de la LBRL y es donde se recoge lo relativo al personal de estas Entidades. Este grupo lo forman los siguientes miembros:

*«El personal al servicio de las Entidades locales estará integrado por funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial».*³³

Anualmente cada Corporación debe aprobar los Presupuestos correspondientes a los puestos de funcionarios, personal laboral y eventual.

Se deben respetar los principios de racionalidad, economía y eficiencia siempre que los gastos respeten los límites marcados.

El Estado establece las normas de estos puestos de trabajo y las Corporaciones locales en base a ellas harán la relación de los puestos de trabajo existentes. Tendrán Registros de Personal para la justificación de las retribuciones prestadas y se encontrarán coordinados con los del resto de Administraciones.

Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen en lo que no disponga esta ley por lo dispuesto en la LEBEP, legislación estatal en materia de función pública, la legislación de las CC.AA.³⁴

³³ Art. 89 LBRL

³⁴ Art. 149.1.18ª CE: «Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas»

Generalmente los puestos de trabajo en las Administraciones locales serán ocupados por funcionarios. Esto queda introducido en la nueva redacción dada al art. 92 LBRL por el art. 1.24 LRSAL.

Los puestos en que las funciones desarrolladas conlleven una participación directa en el ejercicio de potestades públicas o de salvaguardia de los intereses públicos, únicamente los podrán ocupar funcionarios de carrera al servicio de la Administración local.

Para este desarrollo, hay que destacar la introducción del art. 92 bis. de la LBRL³⁵, en el que aparecen regulados los Secretarios e Interventores.

Son necesarias en todas las Corporaciones Locales, reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional, para el desarrollo de las funciones públicas necesarias. Tienen reservadas las responsabilidades administrativas de:

- Secretaría: para el asesoramiento legal preceptivo y el otorgamiento de la fe pública, es la emanación del poder para autenticar ciertos actos. Autentifica, formaliza y certifica ciertos actos, relevantes en la vida social.
- Control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.

Estas habilitaciones se encuentran divididas en subescalas de funcionarios, con sus funciones correspondientes:

- Secretaría, le corresponden las funciones de asesoramiento legal preceptivo y la fe pública.
- Intervención-tesorería, cuyas funciones serán el control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.³⁶
- Secretaría-intervención, le corresponden las funciones de los dos anteriores excepto la de tesorería.

La creación, clasificación y supresión de estos puestos, además del régimen disciplinario será regulado mediante real decreto del Gobierno. Igualmente será regulada, del mismo modo, la provisión de estos puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Lo normal para la provisión de estos puestos será mediante concurso, que tendrá carácter estatal.³⁷

³⁵ Sustituye a la Disposición Adicional 2ª del Estatuto del Empleado Público, en su versión de 2007, Disposición que la LRSAL deroga. Este art. 92 bis. LBRL ha sido introducido por el art. 1.25 LRSAL.

³⁶ Art. 92 bis. 3 LBRL: «*Los funcionarios de las subescalas de Secretaría e Intervención-tesorería estarán integrados en una de estas dos categorías: entrada o superior*»

³⁷ Art. 92. bis LBRL

El nombramiento provisional de estos funcionarios corresponderá a las CC.AA, respetando la normativa de la Administración del Estado.

En los puestos obtenidos por concurso y para poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo o ser nombrados provisionalmente para otro puesto, los funcionarios, deberán haber transcurrido dos años como mínimo, excepto si es en el ámbito de una misma Entidad Local. Si existen razones y circunstancias que requieran cubrir un puesto por uno de estos funcionarios, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá efectuar nombramientos provisionales, para situaciones de urgencia.

Estas circunstancias excepcionales se establecerán reglamentariamente y deberán tener en cuenta los perjuicios que pudieran suponer.

Existirá un Registro participado con las CC.AA., de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Los órganos competentes para incoar expedientes disciplinarios a estos funcionarios y para la imposición de sanciones disciplinarias, se encuentran recogidos en este apartado de la Ley.³⁸

Todo lo anteriormente descrito es uno de los nuevos artículos introducidos por la LRSAL. Las funciones llevadas a cabo por Secretarios e Interventores son necesarias para un correcto ejercicio de la función pública en nuestro sistema.

VII. CONCLUSIONES

Visto lo expuesto en el presente trabajo sobre las nuevas modificaciones introducidas por la LRSAL y en base a la STC 41/2016, de 3 de marzo de 2016. Resolutoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asamblea de Extremadura contra algunos preceptos de esta Ley. Se van a analizar a modo de conclusión los preceptos impugnados y su resolución por el TC.

1.- El recurso de inconstitucionalidad realizaba unas consideraciones generales sobre los límites intrínsecos y extrínsecos de la legislación básica en materia de régimen local.

³⁸ El art. 92 bis. 10 LBRL recoge los órganos competentes para la incoación de expedientes disciplinarios y el art. 92 bis. 11 LBRL recoge los órganos competentes para la imposición de las sanciones disciplinarias

2.- La LRSAL se resuelve en cuatro objetivos básicos: *racionalizar* la estructura de la Administración local, *clarificar* las competencias locales, reforzar el *control financiero* y *presupuestario* y *favorecer* la iniciativa económica privada.

3.- Se impugnan los arts. 13, 24, 25, 27, 57 bis., 85.2, el apartado tercero del art. 116 bis. de la LBRL, tras la nueva redacción o su introducción a través de la LRSAL. También se impugnan la D.A. 8ª, la D.A. 11ª, la D.T. 4ª, la D.T. 11ª, la D.A. 15ª, D.T. 1ª, D.T. 2ª y D.T. 3ª de la LRSAL.

4.- Estas impugnaciones se pueden agrupar en cuatro bloques temáticos³⁹:

- El mapa local en relación con los municipios y entidades tanto inframunicipales como asociativas o instrumentales.
- Las competencias locales
- El plan económico-financiero que deben ejecutar los entes locales cuando incumplan los objetivos de estabilidad o de deuda pública o la regla de gasto.
- La retención de cantidades adeudadas por las CC.AA. con cargo al sistema de financiación autonómica.

5.- Se afirma que el art. 149.1.18 CE ampara la introducción de normas básicas tendentes a introducir criterios de racionalidad económica en las Administraciones locales.

El Estado ha de compatibilizar su competencia para establecer legislación básica encaminada a introducir estos criterios, con la autonomía que se les reconoce a las CC.AA. y entidades locales. Para que a estas entidades se les permita establecer instrumentos para cumplir las exigencias de eficacia, eficiencia y estabilidad presupuestaria.

6.- Las controversias planteadas en el encuadre competencial se inscriben en los arts. 191.1.18 CE y 149.1.14 CE⁴⁰. La atribución de competencias normativas al Estado en las bases de régimen local y el régimen completo de las haciendas locales.

7.- Respecto a la impugnación del art. 13 LBRL de creación y supresión de municipios.

³⁹ STC 41/2016 FJ. 1

⁴⁰ Art. 149.1.14 CE: «Hacienda general y Deuda del Estado»

Para las entidades locales menores caben reglas básicas por parte del Estado que atiendan a «*intereses generales de alcance supraautonómico*».⁴¹

El carácter bifronte del régimen local permite al Estado la regulación de fórmulas cooperativas por la organización territorial del Estado de la que forman parte las entidades locales.⁴²

La LRSAL ha introducido la novedad para el fomento de las fusiones públicas vinculadas a los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El art. 13 LBRL no impide a las CC.AA. el desarrollo de una política propia sobre la fusión de los municipios situados en su ámbito territorial, la CC.AA. no queda al margen de la fusión porque aparece en los apartados 1, 3, 4 y 5 de dicho artículo, por este motivo se desestima la impugnación de los apartados 2, 4 y 6 del art. 13 LBRL.

Las subvenciones otorgadas para favorecer las fusiones municipales por parte del Estado encuentran su fundamento en que es *materia de régimen local* y en la *competencia del Estado para establecer las líneas de apoyo económico para alcanzar determinados objetivos*⁴³.

Por todo ello se debe reconducir a la materia *hacienda general* donde el Estado tiene competencia normativa plena anclada en el art. 149.1.14 CE. Por lo que fueron desestimados los motivos solicitando la inconstitucionalidad de este artículo 13.

8.- Respecto a las impugnaciones del art. 24 bis. LBRL y la D.T. 4ª LRSAL, referidas a las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio.

La LRSAL y ha introducido un límite a la creación de nuevos entes de este tipo, limitando su gestión a una mayor eficiencia. Esta exigencia deriva de la *eficiencia en el uso de los recursos públicos*⁴⁴ y la *estabilidad presupuestaria*⁴⁵, porque pese a su incidencia en la organización interna, son «*intereses generales de carácter supraautonómico*».⁴⁶

Las tareas que correspondan a estos entes y las facultades de control y supervisión seguirán dependiendo de las opciones organizativas que adopten los propios entes locales en el marco de la legislación autonómica sobre régimen local y lo dispuesto en el art. 149.1.18 CE, por lo tanto se sitúa en los márgenes de constitucionalidad.

⁴¹ STC 214/1989, FJ letras a) y b)

⁴² STC 214/1989, FJ 20 e)

⁴³ STC 13/1992 FJ 8

⁴⁴ Id. Nota 16

⁴⁵ Id. Nota 17

⁴⁶ STC 214/1989, FJ 15 b)

La D.T. 4ª LRSAL ha sido declarada constitucional, excepto en el inciso «Decreto del órgano de gobierno de» que ha sido declarado inconstitucional y nulo. Porque el órgano que debe declarar el acuerdo de disolución corresponde a cuestiones de organización administrativa, perteneciendo a la potestad autoorganizativa de la CC.AA. y se ve infringido el art. 148.1.1 CE ⁴⁷ y el art. 9.1.1. del Estatuto de Autonomía de Extremadura donde se recogen las competencias exclusivas de esta CC.AA.

9.- Se impugnan la D.T. 11ª de la LRSAL y el art. 57 LBRL, preceptos relativos a las mancomunidades y consorcios.

La mancomunidad y el consorcio son formas organizativas que permiten colaborar entre sí a los municipios y con Administraciones de otros niveles territoriales para prestar servicios públicos, son *fórmulas de gestión compartida o integrada*.

El art. 149.1.18 CE puede dar cobertura a la legislación básica del Estado que incida sobre los entes locales con autonomía constitucionalmente garantizada proyectando los principios de eficacia, eficiencia y estabilidad presupuestaria o articule ordenación básica sobre las relaciones interadministrativas de cooperación.

Se declara inconstitucional y nulo el inciso «*el Órgano de Gobierno de*» recogido en el párrafo 3º de la D.T. 11ª de la LRSAL, por vulnerar el art. 148.1.1 CE y el art. 9.1.1 del Estatuto de Autonomía de Extremadura; todo lo demás queda desestimando y no se declara inconstitucional.

Estos tres últimos puntos de conclusiones, se corresponden al primer bloque de impugnaciones.

10.- Respecto a las impugnaciones relativas al ámbito competencial y correspondientes a los arts. 7.4, 25, 27 y 85.2 LBRL, hay que comentar de inicio que fueron desestimadas las solicitudes de inconstitucionalidad.

11.- Respecto a la delegación de competencias del art. 27 LBRL, la desarrolla como mecanismo para reducir los costes en la gestión de competencias autonómicas y estatales. Con la delegación se garantizará la suficiencia financiera del municipio⁴⁸ y ha pretendido vincularlo al principio de eficacia.

⁴⁷ Art. 148.1.1 CE: «Organización de las instituciones de autogobierno», relativo a las materias que las CC.AA. pueden asumir competencias

⁴⁸ STC 233/1999, FJ 4

Hay que aplicar la doctrina constitucional relativa a los límites que los arts. 137, 140 y 141 CE imponen a la atribución o supresión de competencias locales. Con ello desestimar el recurso de inconstitucionalidad relativo a este art.

12.- Según la demanda el art. 25.2 LBRL, en relación con el art. 7.4 LBRL fijaría un *numerus clausus* de competencias cerrando a las CC.AA. una ampliación de estas competencias, pero se desestima porque la CC.AA. o el legislador estatal pueden atribuir competencias, pero sin estar obligados a ello. Respetando los principios de eficiencia, eficacia y estabilidad presupuestaria.

El recurso sobre los apartados 3 y 5 del art. 25 LBRL también es desestimado porque no se vulneran las garantías constitucionales de la autonomía local recogida en los arts. 137, 140 y 141 CE.

El recurso del art. 25.4 LBRL también es desestimado porque puede ser adoptado por las competencias del art. 149.1.104 CE, que autorizan al Estado la regulación de ello en base al gasto público. Esto supone que para las CC.AA. en su diseño de políticas deben asegurar la suficiencia financiera de los entes locales y la estabilidad presupuestaria, por ello no vulnera las competencias autonómicas.

13.- Las CC.AA. en el marco de sus competencias son las que pueden atribuir o prohibir competencias en el nivel local como ocurre en la D.T. 1ª y D.T. 3ª LRSAL, impiden a las CC.AA. descentralizar determinados servicios de los entes locales, obligando a las CC.AA. a asumirlos en un plazo determinado y con determinadas condiciones. Esto supone que el Estado ha superado el ámbito asignado por la CE a una regulación básica sobre atribuciones locales⁴⁹ y han invadido las competencias autonómicas de sanidad y asistencia social de los apartados 24 y 27 del Estatuto de Autonomía de Extremadura.

Por lo que son declaradas inconstitucionales y nulas, también la D.A. 11ª ya que sus previsiones van ligadas a las mencionadas D.T.

14.- Los municipios en base al art. 26.1.a) que había en la anterior redacción de la LBRL estaban directamente habilitados por el legislador para ejercer la competencia de control de alimentos y bebidas. La D.T. 3ª que ahora regula esto también ha vulnerado

⁴⁹ Id. Nota 35

los márgenes del art. 149.1.18 CE por lo que se ha declarado inconstitucional y nulo este precepto.

15.- También se solicitó la inconstitucionalidad del art. 116 bis. LBRL, aunque este precepto relativo al plan económico-financiero queda encuadrado en el art. 149.1.14 CE sobre hacienda local y asigna a la diputación provincial tareas de colaboración, coordinación y seguimiento sin que suponga una contradicción con LOEPSF. Por ello queda desestimado.

16.- Como se ve en estas conclusiones hay muchos aspectos de esta Ley que han sido impugnados, pero únicamente han sido declarados inconstitucionales puntos muy concretos-

Con esta Sentencia queda un precedente jurisprudencial del TC en cuanto a las competencias desarrolladas por la LRSAL y la vinculación de esta Ley a la estabilidad presupuestaria que el Estado recoge en sus competencias sobre haciendas locales.

Por ello ha sido utilizada para mis conclusiones.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

MANUALES

- BERMEJO VERA, J., *Derecho Administrativo Básico. Parte general*, Volumen I, 12ª Ed., Civitas, Navarra, 2016.
- COSCULLUELA MONTANER, L., *Manual de Derecho Administrativo*, 26ª Ed., Civitas, Navarra, 2015.
- GAMERO CASADO, E., *Manual básico de Derecho Administrativo*, 12ª Ed., Tecnos, Madrid, 2015
- GARCÍA MACHO, R., *La autonomía municipal y su protección en la Ley de Bases de Régimen Local*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1986.
- JIMENEZ ASENSIO, R., *La reforma local: primer análisis de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local*, Anuario Aragonés del Gobierno Local, 2014.

- MARTÍN REBOLLO, L., *Leyes Administrativas [Manual y Normas Básicas]*, Aranzadi, Navarra, 2015
- PAREJO ALFONSO, L., *Lecciones de Derecho Administrativo*, 8ª Ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.
- SÁNCHEZ MORÓN, M., *Derecho Adminsitrativo. Parte general*, 11ª Edición, Tecnos, Madrid, 2015.

REVISTAS

- BASSOLS COMA, M., «La racionalización de la Administración local en el marco de la sostenibilidad financiera: panorama general », en *Cuadernos de Derecho Local (QDL)*, nº34, 2014, pp. 21-48.
- FERNÁNDEZ-FIGUEROA GUERRERO, F. (coordinador), *GUÍA PRÁCTICA sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)*, Fundación Democracia y Gobierno Local, Abril 2014.

LEGISLACIÓN

- Constitución Española. Recuperado de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229 el día 1 de marzo de 2016.
- Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Recuperado de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3444 el día 1 de junio de 2016.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-5392> el día 1 de marzo de 2016.
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-7788> el día 29 de mayo de 2016.
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Recuperado de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13756 el día 1 de marzo de 2016.

- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-151> el día 1 de junio de 2016.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Recuperado de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5730 el día 20 de mayo de 2016.
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-7730> el día 30 de mayo de 2016.

JURISPRUDENCIA

- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 4/1981, de 2 de febrero de 1981. Recuperado de <http://aranzadi.aranzadidigital.es.roble.unizar.es:9090/maf/app/search/template?stid=jurisprudencia>
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 27/1987, de 27 de febrero de 1987. Recuperado de <http://aranzadi.aranzadidigital.es.roble.unizar.es:9090/maf/app/search/template?stid=jurisprudencia>
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 31/1993, de 26 de enero de 1993. Recuperado de <http://aranzadi.aranzadidigital.es.roble.unizar.es:9090/maf/app/search/template?stid=jurisprudencia>
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 32/1981, de 28 de julio de 1981. Recuperado de <http://aranzadi.aranzadidigital.es.roble.unizar.es:9090/maf/app/search/template?stid=jurisprudencia>
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 37/1981, de 16 de noviembre de 1981. Recuperado de

<http://aranzadi.aranzadidigital.es.roble.unizar.es:9090/maf/app/search/template?stid=jurisprudencia>

- Sentencia núm. 41/2016, de 3 de marzo de 2016. Recuperado de <http://aranzadi.aranzadidigital.es.roble.unizar.es:9090/maf/app/search/template?stid=jurisprudencia>
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 64/1990, de 5 de abril de 1990. Recuperado de <http://aranzadi.aranzadidigital.es.roble.unizar.es:9090/maf/app/search/template?stid=jurisprudencia>
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 84/1982, de 23 de diciembre de 1982. Recuperado de <http://aranzadi.aranzadidigital.es.roble.unizar.es:9090/maf/app/search/template?stid=jurisprudencia>
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 109/1998, de 21 de mayo de 1998. Recuperado de <http://aranzadi.aranzadidigital.es.roble.unizar.es:9090/maf/app/search/template?stid=jurisprudencia>
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 170/1989, de 19 de octubre de 1989. Recuperado de <http://aranzadi.aranzadidigital.es.roble.unizar.es:9090/maf/app/search/template?stid=jurisprudencia>
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 179/1985, de 19 de diciembre de 1985. Recuperado de <http://aranzadi.aranzadidigital.es.roble.unizar.es:9090/maf/app/search/template?stid=jurisprudencia>
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 331/1993, de 12 de noviembre de 1993. Recuperado de <http://aranzadi.aranzadidigital.es.roble.unizar.es:9090/maf/app/search/template?stid=jurisprudencia>

RECURSOS DE INTERNET

- El Constitucional admite nueve recursos contra la Ley de Reforma Local. Recuperado de <https://www.inspectoreshaciendalocal.org/noticias/el-tc-admite-tr%C3%A1mite-nueve-recursos> el día 2 de Junio de 2016.
- El TC admite a trámite nueve recursos. Recuperado de <https://www.inspectoreshaciendalocal.org/noticias/el-tc-admite-tr%C3%A1mite-nueve-recursos> el día 2 de Junio de 2016.
- Informe sobre la interpretación de la modificación de la Ley de Bases de Régime Local por Real Decreto-Ley 10/2015 de 11 de septiembre. Recuperado de <http://www.cosital.es/noticias-y-actualidad/921-2015-09-14-13-01-22.html> el día 1 de Junio de 2016
- La posición institucional de las Diputaciones Provinciales a partir de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Recuperado de www.ual.es/personal/jfuentes/idl/reforma/Provinciales.pdf el día 6 de Mayo de 2016.